

Globethics Repository



Chile frente a sí mismo [Chile against himself]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Koschützke, Alberto
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-09-20 20:26:42
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/217424

Chile frente a sí mismo

*Los límites del fundamentalismo de mercado
y las protestas estudiantiles*

ALBERTO KOSCHÜTZKE

El ciclo de manifestaciones abierto en Chile con las revueltas estudiantiles contribuyó a alentar un debate sobre el modelo de país construido en la posdictadura, el cual, pese a los indudables avances en varios terrenos, ha consolidado una profunda mercantilización de la vida social. Más allá de las demandas en materia de educación, derechos indígenas, medio ambiente o género, el carácter masivo de las protestas desarrolladas durante 2011 ha puesto al país frente a sí mismo, en un momento en el que el actual presidente ha profundizado la retórica promercado y gobierna como si fuera el director de «Chile SA», y los ciudadanos, meros usuarios y consumidores.

La prensa internacional está sorprendida. La joven líder estudiantil chilena Camila Vallejo es nombrada personalidad del año por el periódico británico *The Guardian* con gran ventaja sobre la canciller alemana Angela Merkel. En 2011 se produjeron en Chile alrededor de 6.000 manifestaciones. América Latina –y el mundo– miran con atención... De forma sorpresiva, Chile se ha convertido en un dinámico laboratorio social,

luego de años en que se constituyera en un país presentado y autopresentado como modelo en términos de transición democrática, estabilidad política, reducción de la pobreza y políticas modernizadoras de mercado.

Ese carácter ejemplar quedó especialmente ratificado en febrero de 2010, cuando elecciones libres llevaron al poder, por primera vez en 50 años, a un presidente del bloque

Alberto Koschützke: politólogo alemán, ex-director de *Nueva Sociedad* (1982-1993).

Palabras claves: modelo educativo, Estado, mercado, movimientos sociales, Sebastián Piñera, Camila Vallejo, Chile.

Nota: traducción de Florencia Martin.

de derecha. La Concertación –alianza de centroizquierda conformada por partidos de orientación socialdemócrata¹ y por el Partido Demócrata Cristiano– había liderado la transición durante 20 años y cuatro periodos legislativos. Hoy, después de dos años de gobierno de la alianza de derecha integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) –aún influido por seguidores de Augusto Pinochet– se confirma que el resultado electoral de 2010 significó una bisagra histórica. Con la elección como presidente del magnate Sebastián Piñera (según Forbes, el hombre más acaudalado del país), el periodo de transición democrática quedó sellado. Adicionalmente, teniendo en cuenta el resultado electoral y analizando la derrota de la Concertación, pueden encontrarse los puntos débiles de la fase de reconstrucción democrática y los desafíos de la nueva etapa de la historia chilena.

■ El balance de la Concertación: logros y desaciertos

La estabilidad y los logros de la democracia chilena están basados en dos pilares heredados de la dictadura militar: el modelo político, garantizado por la Constitución de 1980, y el modelo económico, promotor de un curso liberal que alentó las privatizaciones y redujo al mínimo la participación económica estatal. En esta nueva fase de modernización democrática, ambos

modelos deben ser revaluados (y están siendo revaluados en forma contundente, tal como lo demuestra el actual ciclo de protestas). Es necesario analizar si estos modelos responden de manera satisfactoria a las exigencias, expectativas y necesidades de la nueva etapa o si, por el contrario, han conducido a dejar como «agenda pendiente» demasiados problemas durante los primeros 21 años de democracia.

El enfoque central para poder entender la actual crisis parte de la constatación de que, desde 2010, Chile vive una situación de quiebre en la cual los mecanismos institucionales vigentes y los principales actores políticos no han sido capaces, o no han tenido la voluntad política, de responder a este nuevo desafío. Los logros de la Concertación –la actual oposición– fueron considerables. Su aporte a la restitución del sistema democrático, después de 17 años de desolación civilizatoria bajo la brutal dictadura pinochetista, no puede ser lo suficientementepreciado. No obstante, también es posible observar que la Concertación desarrolló e instauró la democracia como sistema de instituciones y de procesos, pero no como principio de organización social. De acuerdo con el credo neoliberal, se entendió la sociedad como una suma de usuarios y consumidores, y no de

1. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata.

ciudadanos y ciudadanas; por eso los movimientos sociales de los últimos meses articulan precisamente los reclamos de los ciudadanos excluidos por el fundamentalismo de mercado y sus representantes.

Los 20 años de gobierno de la Concertación llevaron a un desgaste y a una pérdida de credibilidad que derivaron en el cambio de poder a comienzos de 2010, un cambio que desde el punto de vista de la alternancia político-democrática es muy loable. Los conflictos surgieron en particular en la interacción entre las políticas fiscal, económica y social. Un gobierno de izquierda es medido, posiblemente más que una conducción conservadora, por su intención de obrar en favor de la justicia social. Y cuando no lo hace, sobrevienen grandes decepciones y déficits de legitimidad. La gran distancia que separa a la sociedad civil de los partidos y la esfera política, y una sociedad que ya no está de acuerdo con un sistema que, si bien puede demostrar logros económicos, no es capaz de llevar a cabo reformas estructurales profundas, son otros de los aspectos que explican la actual situación de descontento. Parte importante de las elites políticas se adaptó a las estructuras de poder que aseguran su propio statu quo y no solo adoptó, sino que también defendió, la lógica de una economía de mercado en gran medida desregulada. Una vez que la unión que generaba la lucha por la democracia cedió,

la política de lo posible, de los pequeños pasos, de la adaptación a las condiciones dadas no bastó para garantizar el poder de la Concertación. Pero la derecha tampoco está encontrando el apoyo esperado.

La movilización estudiantil de Chile en 2011, tan comentada más allá de sus fronteras, se transformó así en el catalizador central de un proceso en el que el país, según palabras del Premio Nacional de Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón, se reinventa política, económica y socialmente.

■ La discusión educativa

El debate educativo comenzó a principios de 2011 de un modo que pasó casi inadvertido, con una manifestación de estudiantes en contra de los altos costos y los bajos niveles de formación en universidades públicas y privadas. Ocho meses y unas 210 manifestaciones después, la política educativa no solo ha pasado a ser el tema número uno de los medios, del ámbito político, la sociedad, los cafés, las familias, los *talk shows* y las encuestas de opinión, sino que además acapara los debates presupuestarios y las discusiones sobre la gobernabilidad, la calidad democrática del actual gobierno y el modelo de desarrollo político, económico y social. La discusión también ha tocado los principios fundamentales de la vida social cotidiana: pone sobre el tapete

la relación entre Estado y mercado, la educación organizada desde el ente público o desde el sector privado, el sistema de enseñanza como mercancía y el lucro que se persigue en el sector. Se trata de definir financiación y costos, ganancias y beneficios, calidad y acceso igualitario al sistema educativo. Pero detrás de estos aspectos se plantean sin duda varios interrogantes esenciales: ¿la educación es un derecho civil, una cuestión social, un deber estatal y un bien público, como sostienen los estudiantes chilenos remitiéndose a la Unesco, o es una cuestión privada y un bien de consumo que se produce en el mercado libre por iniciativa empresarial?

El presidente Piñera defendió en televisión el fin de lucro², incluso en el marco universitario, y reconoció: «Si al fin del día una institución, de cualquier nivel, entrega educación de calidad, respeta las leyes, si cumple con la obligación y hace con los recursos públicos lo que el Estado quiere que haga con ellos y le queda un excedente, esa es una justa compensación... No creo que tengamos que crear instituciones con fines de pérdidas»³.

Los gobiernos de la Concertación tuvieron una notable participación en la construcción del actual sistema universitario, que de hecho bate algunos récords: el arancel en las universidades chilenas llega a 41% del PIB per cápita; es el mayor porcentaje en

el ámbito mundial (en Canadá, por ejemplo, es de aproximadamente 10%). En los últimos 12 años, estos aranceles aumentaron 60% más que la inflación general. Chile invierte 0,5% de su PIB en las universidades, la proporción más baja del mundo. Si una familia que pertenece al 60% pobre de la población quiere enviar a un hijo a la universidad, debe hacer uso de más de 40% de sus ingresos⁴. A su vez, los créditos públicos y privados que se otorgan con aval del Estado para que los estudiantes puedan financiar su formación significan un gran perjuicio para el futuro de los jóvenes académicos: un estudiante de periodismo que, por ejemplo, se ha formado durante cinco años en la Universidad Católica de Santiago, deberá abonar durante 20 años un 28% de su eventual ingreso mensual (si es que consigue un puesto en los medios) para

2. En Chile está prohibido el fin de lucro en el ámbito de la educación superior; las universidades son entidades sin fines de lucro. Sin embargo, está permitido, por ejemplo, que los titulares de las universidades posean firmas inmobiliarias y hagan cuantiosas ganancias alquilando predios e instalaciones a sus propias instituciones, con lo cual, además, se justifican los descomunales aranceles de estudio.

3. José Miguel Wilson: «Piñera defiende que educación de calidad tenga 'justa compensación'» en *La Tercera*, 5/9/2011, disponible en <<http://diario.latercera.com/2011/09/05/01/contenido/pais/31-82608-9-pinera-defiende-que-educacion-de-calidad-tenga-justa-compensacion.shtml>>.

4. Christian Palma: «Patricio Meller: 'Los estudiantes equivocaron el enfoque al atacar el lucro'» en *La Tercera*, 13/9/2011, disponible en <<http://diario.latercera.com/2011/09/13/01/contenido/pais/31-83458-9-patricio-meller-los-estudiantes-equivocaron-el-enfoque-al-atacar-el-lucro.shtml>>.

saldar la deuda contraída. El sistema de becas y créditos está lejos de compensar las desventajas educativas a las que de por sí se ven sometidos los estratos más pobres de la sociedad. Aproximadamente 30% de las 122.000 becas estatales benefician a jóvenes que pertenecen al 30% de las familias más adineradas, es decir, a jóvenes que a su vez ya han podido cursar en las mejores escuelas (privadas) del país⁵. En otras palabras, los hijos de los más acaudalados (los que tienen un ingreso mensual superior a us\$ 2.000) obtienen el doble de becas que los de las familias más pobres (quienes ganan mensualmente unos us\$ 60).

Los detalles del debate sobre la financiación son extremadamente complejos. Desde que la reforma de la dictadura estableció en 1981 que el sistema educativo también se desarrollaría en el marco de la economía radical del libre mercado y desató el consiguiente auge de las universidades privadas, las instituciones de este tipo (y con el tiempo, también las de nivel secundario) fueron en aumento hasta llegar a representar hoy una mayoría frente a los establecimientos públicos. Las 25 universidades «tradicionales» de épocas previas a la dictadura (la mayor parte de ellas, públicas, a excepción de algunas como la Católica), que operaban sobre la base de aranceles definidos según el ingreso que tuviesen los padres de los estudiantes, son las que conforman hasta el día de hoy

el Consejo de Rectores. Sus estudiantes, nucleados a escala nacional en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), son los que organizan y representan; ellos «son» el movimiento estudiantil. Las universidades privadas tienen una participación únicamente periférica.

Si bien Camila Vallejo, miembro de las Juventudes Comunistas y presidenta en 2011 de la Confech, no logró contar con suficientes votos en diciembre pasado para conservar el cargo al frente de la confederación, fue coronada mundialmente como «rostro del movimiento estudiantil», dada la sed mediática de personalidades y estrellas. La prensa nacional e internacional ofreció su imagen al mercado y no dudó en incluir comentarios sexistas sobre su belleza. Las exigencias estudiantiles son claras y convincentes: que se ponga fin a los negocios con la educación; que se ofrezca educación gratuita e igualdad de oportunidades educativas para todos; que las posibilidades de formación ofrezcan un alto nivel y que se otorgue preeminencia al sistema de educación pública. Estos objetivos cuentan con el respaldo de más de 70% de la población, incluso después de ocho meses de movilizaciones permanentes. En decenas de manifestaciones, que en varias oportunidades convocaron a más de 100.000 personas en Santiago y a varios cientos de miles

5. Estudio de la Secretaría General de la Presidencia en *La Tercera*, 22/10/11.

en otras regiones universitarias del país, puede observarse a madres, padres, abuelos, maestros, profesores, rectores y representantes de organizaciones civiles. En resumen, no solo los estudiantes, sino gran parte de la población, se han alzado para avalar esta «causa noble, hermosa y legítima», según definió el presidente Piñera los objetivos del movimiento estudiantil en su discurso frente a la Asamblea de las Naciones Unidas⁶, ante la reacción incrédula, irónica o indignada de los chilenos.

■ Un uso ambivalente de la violencia

Al parecer, para el jefe de Estado no fue una contradicción dispersar –al día siguiente de sus declaraciones– a los representantes y defensores de esta causa noble y legítima haciendo uso de gases lacrimógenos y carros lanza agua. En las manifestaciones masivas suelen hacer aparición grupos minoritarios de violentos que se enfrentan con las fuerzas de seguridad y destrozan automóviles, semáforos y vidrieras. Mientras que en mayo, al iniciarse las protestas, la policía reportó 50 personas que causaban desmanes, en agosto los «encapuchados» ya eran 200, y en la actualidad la cifra de quienes parecen estar dispuestos a generar destrozos en forma regular ya asciende a 2.000. Con frecuencia estos grupos son mantenidos en jaque por los propios estudiantes movilizados.

La policía parece ser increíblemente incapaz de poner freno a este tipo de incidentes o de realizar detenciones con pruebas contundentes. En los últimos meses, de los 1.871 presuntos agresores detenidos (90% no eran estudiantes, sino en su mayoría jóvenes desclasados sin empleo), solo cinco fueron condenados. Por ello, la policía y sus arrestos por lo visto apresurados pasaron a estar en el centro de los debates. El propio ministro de Justicia llamó la atención a los jueces y amenazó sin reservas con evaluar, antes de aprobar ningún ascenso, de qué manera se había actuado en cumplimiento del deber en el marco de los procesos contra los encapuchados. Más aún, el gobierno impulsó un proyecto de ley en «resguardo del orden público», que debe ser entendido como un peligroso intento por criminalizar el movimiento de manifestaciones, no solo de los estudiantes. Haciendo uso de una serie de conceptos legales no muy definidos, la propuesta amenaza con imponer duras sanciones a quienes convoquen congregaciones en las que, por cualesquiera razones, se produzcan «desórdenes». El clima se tornó más áspero.

Pero los estudiantes mantienen despierto el interés de la opinión pública local y mundial mediante movilizaciones sumamente innovadoras y creativas: despliegan bandas de música, tambores y trompetas, entonan

6. Nueva York, 22 de septiembre de 2011.

cantos en coro, aparecen bailarines y grupos disfrazados o enmascarados, malabaristas y elementos de la cultura pop que siempre se destacan por su vigor y alegría, haciendo que las manifestaciones, sin perder de vista sus objetivos políticos, sean todo un acontecimiento. Quedó demostrado que no se trata de cabecillas encarnizados que tienen la mira puesta en la política, sino de gente joven que, segura de lo que quiere, exige con naturalidad el cumplimiento de ciertos derechos, entre los que destaca el otorgamiento de us\$ 1.800 millones, la suma que estiman necesaria para poner en práctica sus exigencias. Eso llevó a que el número 1.800 se convirtiera en una cifra emblemática de las protestas⁷.

Las huelgas de hambre de estudiantes secundarios, el campamento de protesta en las riberas del río Mapocho –que fue noticia tras haber sido dispersado por la policía para «proteger» a los escolares, porque varios de los «protegidos» debieron ser internados con heridas severas producidas por golpes– y la muerte de un alumno por el impacto de una bala disparada por el arma de un policía, son episodios que generan solidaridad y adhesión por parte de la población.

Chile, tras su denostación internacional durante la dictadura de Pinochet, se muestra muy susceptible a lo que ocurre con su imagen en el extranjero.

Hoy los líderes estudiantiles pueden impactar de un modo diestro y totalmente innovador en la esfera internacional y presentar sus argumentos ante la Unesco, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fundaciones y movimientos sociales; pueden proponer que la ONU medie en su disputa con el gobierno y lograr que la Comisión de Derechos Humanos de esa organización y visitantes internacionales destacados califiquen los operativos policiales de desmedidos y exagerados. Todo esto es algo que, además de otorgar al movimiento social una dimensión asombrosamente mundial, constituye un estorbo para un gobierno que lucha por mantener su imagen dentro y fuera del país.

Pese a su constante retórica, el gobierno no parece estar dispuesto a acceder a las exigencias de los estudiantes. Al observar el presupuesto de 2012, no se puede reconocer que la «causa noble y hermosa» de la educación vaya a obtener una financiación copiosa. La oposición de la Concertación, en temeroso y estrecho acuerdo con la conducción de la Confech

7. Si 12.000 parejas jóvenes se besan durante 1.800 segundos (30 minutos) delante del Palacio Presidencial y ante los ojos de la prensa y la televisión internacional («besatón») como forma para manifestarse a favor de la enseñanza pública y gratuita, tienen la presencia garantizada en los noticiosos durante la principal franja horaria de la BBC y la CNN. Lo mismo puede decirse de una corrida de postas de 1.800 horas (75 días) alrededor del Palacio de la Moneda.

—que se encontraba en la sala anexa de las comisiones parlamentarias de negociación— rechazó el presupuesto educativo para no caer en total desacreditación ante los estudiantes. Pero ese fue precisamente el punto que se le criticó en las elecciones universitarias de fin de año a la conducción de la Confech: su disposición a la negociación. Los nuevos directivos hacen hincapié en su independencia radical y hasta en su enemistad con todos los partidos políticos.

Empero, independientemente de cómo continúe el debate después del receso estival, lo cierto es que el movimiento estudiantil ha introducido nuevas formas de experiencia y perspectivas sobre la sociedad y el Estado que ya no pueden ser ignoradas, y ese giro, a su vez, puede ser entendido como uno de los mayores cambios políticos y socioculturales que ha vivido Chile desde la recuperación de la democracia. La cuestión educativa está anclada en la agenda como un desafío político central. Pero esa discusión tiene, además, consecuencias de gran alcance en otros campos problemáticos de la política que ahora son incluidos en los debates públicos, como por ejemplo la reforma fiscal, cambios constitucionales democratizadores, la secularización de la sociedad, los derechos de las mujeres y las llamadas minorías sexuales y, más en general, la relación Estado-mercado-sociedad. Adicionalmente, a través de la movilización de los estudiantes y de otros

grupos de protesta, el año 2011 abrió los ojos a los conflictos ecológicos, étnicos y sociales generales, y la exigencia de reformas políticas y económicas pasó a ser omnipresente.

■ Nueva Constitución, nueva política

El modelo político chileno está basado en la Constitución de Pinochet y su sistema binominal⁸, que, por un lado, garantiza estabilidad, si bien al punto de la inmovilidad, y, por el otro, establece una administración en divisiones electorales que hace que en el sur del país, escasamente poblado, alrededor de un décimo de los votos necesarios en la capital sean suficientes para obtener un escaño en el Parlamento.

8. En el sistema binominal, actualmente implementado en el nivel legislativo, cada división electoral elige dos candidatos. Las bancas son otorgadas en relación con la cantidad de votos obtenidos en una división electoral, lo que equivale a decir que los votos no son medidos por agrupación política a escala nacional. Resultan elegidos los dos candidatos cuyos partidos o coaliciones logren la mayor cantidad de votos dentro de una división, y el resto de los candidatos queda descartado. Si una lista logra obtener el doble de votos que la segunda más votada, obtiene ambos escaños. De esta manera, el sistema electoral deriva en un sistema bipartidario o de dos bloques, impide que agrupaciones menores lleguen a estar representadas en el Parlamento y fuerza a los partidos a sellar grandes alianzas para poder resultar primeros (o segundos, pero sin un amplio margen de diferencia) en las urnas de cada división. En Chile, esta organización lleva a una distribución casi equitativa entre ambos bloques (la Concertación y la Alianza) tanto en la Cámara baja como en la alta. Fuera de Chile, el único país del mundo que aplica este sistema es Indonesia.

En este tipo de intento por lograr una representación justa de las regiones en la esfera nacional, el principio *one (wo)man one vote* queda prácticamente anulado. La Constitución pone límite a las reformas legislativas de relevancia por medio de refinadas normas de quórum y suele exigir una mayoría de 4/7 o superior, cosa que en los hechos solo se puede lograr mediante un acuerdo entre ambos bloques. Este procedimiento le otorga a la minoría una especie de derecho de veto.

Por otro lado, hacia fines de 2011 y tras casi siete años de debate, el Congreso chileno abolió tanto el deber de inscribirse en los registros electorales para poder votar como la obligación de votar una vez que el ciudadano se hubiera inscrito. Con la nueva disposición, la inscripción se produce en forma automática, con lo cual en los comicios municipales de octubre de 2012 se incorporarán 4,8 millones de nuevos votantes, el mayor incremento electoral desde que se implementó el sufragio femenino en 1949. (Como punto de comparación pueden tomarse las últimas elecciones, en las que participaron casi 7 millones de los aproximadamente 7,4 millones de ciudadanos inscritos). Además, se espera que en los próximos comicios presidenciales de 2013 también puedan participar los chilenos que viven en el extranjero, decisión que pondría fin al debate sostenido desde 1990. Estos cambios vuelven extremadamente difícil hacer un pronóstico electoral. Puede suponerse

que, ante la composición etaria de los 4,8 millones de nuevos potenciales votantes (80% está por debajo de los 35 años), la elección se incline más bien por las variantes políticas «jóvenes» y no tanto por los antiguos partidos de lento recambio. Según los cálculos, por el momento solo 7% de los estudiantes que se manifiestan tienen derecho a votar, y las posibilidades de que la alianza de gobierno obtenga el respaldo de la mayoría de los habilitados son más bien bajas.

Las reformas constitucionales menores efectuadas durante la Presidencia del socialista Ricardo Lagos apartaron a algunos de los senadores activos nombrados por Pinochet, que habían seguido representando la voluntad del anciano dictador durante los dos primeros periodos legislativos en épocas de democracia. Pero el reclamo de una Constitución nueva y democrática que no esté marcada por el espíritu de la dictadura se ha hecho cada vez más fuerte. Las exigencias apuntan a que se elimine o al menos se modifique el sistema binominal y a que se contemplen derechos más participativos como las consultas populares y los plebiscitos. Asimismo, se reclama que los gobernadores de cada región no sean nombrados por el presidente sino elegidos; una ley de partidos; el financiamiento público de las agrupaciones políticas; una mayor democracia intrapartidaria; una cuota quizás de 30% de participación femenina en los cargos; primarias para

la elección de los candidatos y la reducción del mandato de diputados y senadores. El catálogo de reformas sigue siendo amplio y demuestra cuánto se ha acumulado en estos últimos 21 años de democracia.

■ Igualdad y justicia social

El modelo económico de la dictadura chilena se basa en el pilar de la intangibilidad del patrimonio privado escollado por los principios sacros del mercado y la competencia, y fue incorporado, prácticamente sin cambio alguno, por la Concertación. Es casi el único país del continente en el que el fundamentalismo de mercado pudo imponerse de manera tan contundente.

En el marco de las libertades radicales de mercado (y de niveles de corrupción reconocidamente bajos), Chile atravesó un periodo de una política de apertura activa de los mercados (firmó 20 tratados de libre comercio con 57 países) y vivió un profundo cambio estructural. El PIB casi se triplicó entre 1990 y 2010; los niveles de pobreza arrastrados desde la dictadura, de 40%, se redujeron a 15% en 2009; y la pobreza absoluta pudo ser llevada a menos de 4%. En la actualidad, Chile es el segundo país con el mayor ingreso per cápita de América Latina (us\$ 16.000, levemente por debajo de Argentina), pero las desigualdades heredadas de la dictadura han permanecido prácticamente inalteradas.

Los considerables logros económicos y las exorbitantes tasas de crecimiento registradas llevaron a que el país fuese incorporado a la OCDE; pero, a su vez, ser miembro de la OCDE hace que los demás integrantes sean el punto de referencia a partir del cual se miden los logros, las fallas y los déficits chilenos.

Al menos durante sus primeros dos mandatos al frente del país, desde 1990 hasta 2000, los gobiernos de la Concertación no pudieron –ni quisieron– implementar más que unos pocos cambios cautos al modelo pinochetista, mientras gobernaban como una «democracia condicionada» bajo la amenaza de un eventual regreso de la dictadura. Dados la Constitución y el derecho electoral impuestos por la dictadura, no disponían de la mayoría de dos tercios necesaria para efectuar muchas reformas en el Senado y en la Cámara baja, lo cual los obligaba permanentemente a sellar compromisos con la oposición. Esa es la justificación esgrimida por los actuales partidos de oposición (no siempre ateniéndose a la verdad) frente a las críticas por las fallas o los desaciertos de su periodo gubernamental. Muchos de los caminos fallidos tomados –como, por ejemplo, en el sector educativo– se remontan a esa época y hacen que los cuestionamientos opositores al actual gobierno resulten poco creíbles.

9. Ministerio de Planificación: Encuesta Casen 2009, <www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen2009/RESULTADOS_CASEN_2009.pdf.

Tampoco existió una gran predisposición a hacer cambios en el modelo económico, debido a que quienes ocupaban cargos decisivos en el gobierno de centroizquierda también sucumbieron a los discretos encantos de las promesas de bienestar neoliberales, que no solo los beneficiaban a título personal, sino que también hacían aumentar los ingresos de las arcas públicas a través de las materias primas, en particular del cobre, cuyo precio en los últimos años había ido en aumento. Este último aspecto llevó a que la estructura de producción y de exportación de Chile no fuera sometida a verdaderas reformas. El país sigue teniendo una estructura económica y de exportación propia de una nación en vías de desarrollo durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Su principal socio comercial, Estados Unidos, ha sido reemplazado por China como gran consumidor de cobre. No obstante, a grandes rasgos la exportación sigue evidenciando la misma estructura que hace 40 años: se destaca por la venta de cobre, de otras materias primas y de unos pocos alimentos elaborados (vino, pescado y frutos marinos).

Este modelo económico también evidencia un «subdesarrollo exitoso». La política energética, absolutamente insuficiente, pone coto a las esperanzas de crecimiento. Además, los proyectos de instalación de cinco enormes centrales hidroeléctricas en la Patagonia, una región sensible en

materia ecológica, y unos 2.000 km de red nacional de transmisión de energía –la llamada «carretera eléctrica»– suscitan desde hace un año protestas masivas en todo el país. El gobierno chileno, pese a que el país ha sufrido no pocos terremotos, tampoco descarta la opción de la energía nuclear. En el marco de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Santiago, ambos Estados firmaron en marzo del año pasado, es decir, poco después de la catástrofe de Fukushima, un acuerdo de cooperación para el desarrollo de ese tipo de energía.

La falta de regulaciones y controles en diversos sectores de la economía también daña la imagen de país modelo. El fetichismo de mercado de los últimos 40 años descuidó de modo inaceptable, y a menudo muy a conciencia, la aplicación de mecanismos de control y de regulación a bancos e institutos de crédito, por poner tan solo un ejemplo. En virtud de las actuales estructuras de poder, la competencia exenta de controles y la falta de disposiciones regulatorias por parte del Estado derivan en un mercado interno altamente monopólico u oligopólico. En la actualidad, las prestaciones que solían ser públicas (transporte, comunicación, infraestructura, energía, agua y salud) están en manos de unos pocos conglomerados privados. Esta concentración adquiere una enorme relevancia política en el sector de los medios de comunicación, dominados por unos pocos grupos financieros conservadores

que, además, al tener nexos transversales con bancos y entidades financieras, representan un sólido cartel de intereses de las elites de poder tradicionales y económicas.

La distribución extremadamente desigual de la propiedad y de los ingresos, que lleva a que Chile, con un coeficiente de Gini de 0,52, esté en la cola de la OCDE, es, entre otros, resultado de dicha política. Uno de los factores que actúa como garante central de la desigualdad es, sin duda alguna, el sistema fiscal. Con una carga tributaria menor a 20% y teniendo en cuenta el PNB para establecer la comparación mundial, Chile está muy por debajo de los estándares internacionales. La oposición, después de haber gobernado durante 20 años, se ha enarbolado a sí misma como defensora de la lucha contra la «desigualdad» y en favor de la justicia social, pero los índices de popularidad extremadamente bajos que registran los partidos de la oposición son un claro indicador del déficit de credibilidad por el que atraviesan. El oficialismo, no obstante, comparte esta situación.

■ Coyuntura política y perspectivas

Después de casi dos años de gobierno, el actual gabinete, y en primer lugar el presidente, aún le deben a la población una agenda político-programática coherente. Falta un «relato conservador» generador de sentido, que pueda sistematizar y estructurar (y

por ende explicar) la acción gubernamental. Sebastián Piñera es más bien un presidente «de anuncios», y casi no asume su función consensual y de liderazgo ni siquiera ante la coalición de gobierno, cada vez más escindida en lo ideológico. Su popularidad ha caído a 23%¹⁰, al tiempo que la oposición ha ganado perfil desde que insta a analizar de cerca «la letra chica» de las grandilocuentes promesas del proyecto.

El presidente-empresario Piñera, que había prometido una «nueva forma de gobernar», actúa dentro de una concepción política radical de mercado, en parte como si fuese director general de «Chile SA», manejándose con sus ministros como si se tratase de jefes departamentales o gerentes. Que algunos de ellos hayan actuado como si en efecto lo fuesen facilitó la crítica lanzada por los mismos partidos de la coalición oficialista, que no se ven lo suficientemente representados por su propio gobierno. La actuación presidencial es más bien una suma de medidas individuales aisladas. El conflicto (que ya se avizoraba en las primeras semanas de gobierno) por la redefinición de un «conservadurismo democrático moderno» (que ahora ha desaparecido del discurso y de la práctica) frente a la derecha tradicional reaccionaria afecta a casi todas las

10. «Una histórica crisis de popularidad obliga a Piñera a cambiar el gabinete» en *Clarín*, 30/12/2011, disponible en <www.clarin.com/mundo/historica-popularidad-Pinera-cambiar-gabinete_0_618538223.html>.

áreas: la política educativa, la reforma fiscal, la relación con la oposición, la actuación de la policía, etc.

Sin embargo, hasta el momento este derrumbe de la popularidad del gobierno le ha servido de poco a la oposición. Si bien ha habido áreas de conflicto político particulares que se manejaron y llevaron adelante con mayor consenso y resolución, siguen faltando orientaciones programáticas claras, una conducción política decidida, alternativas decisivas a las estrategias gubernamentales y, ante todo, dadas las falencias de los últimos 20 años de gobierno de la Concertación, credibilidad. Las vanidades personales en pugna por las candidaturas presidenciales para 2013 y la estrategia aún no resuelta de la alianza opositora para las elecciones municipales de 2012 hacen que no resulte del todo realista esperar un pronto fortalecimiento del bloque de centroizquierda. El nuevo Partido Progresista (PRO), del disidente de la Concertación Marco Enríquez Ominami, quien en las últimas elecciones logró un sensacional 20%, ya es una agrupación política legal, y Ominami sigue en las encuestas a la ex-presidenta Michelle Bachelet –que ostenta un excepcional apoyo a su persona– como único político de la oposición que cuenta con un sostén claro, muy por encima de los demás representantes, incluso del gobierno.

En lugar de debatir programas, los partidos de la antigua Concertación

discuten si la alianza aún existe, si debería existir o si no resultaría mejor fundar una alianza de centroizquierda totalmente nueva (que integrara al PRO, a los comunistas y a otras pequeñas agrupaciones) para las próximas elecciones presidenciales y municipales. Pese a los drásticos valores que arrojan las encuestas, los bloques más conservadores dentro de los partidos de izquierda insisten en la continuidad de la Concertación y no consideran que la renovación del programa o de sus representantes políticos sea una prioridad, ya que apuestan por la fuerza de la figura de la ex-presidenta Bachelet como candidata presidencial para 2013 en tanto tabla de salvación para la crisis partidaria. En cambio, las fracciones de estos partidos que tienen una postura más crítica hacia el *establishment* no definen sus objetivos según las chances de adquirir poder o victorias electorales. Insisten, más aún ante los movimientos sociales de los últimos meses, en redefinir los contenidos, las metas y los procesos políticos. Están en vías de establecer una agenda de reformas que se propone recuperar la confianza y la credibilidad entre los electores y construir nuevos puentes hacia la sociedad civil. En este marco, también esperan que Bachelet, en caso de estar dispuesta a abandonar su cargo como directora de ONU Mujeres (la agencia de la ONU para la igualdad de la mujer), respalde su agenda.

■ Una población en movimiento

La debilidad de la oposición política parlamentaria es compensada por la oposición social, que crece por reclamos puntuales a la par y junto con el movimiento estudiantil de protesta. Los que se mostraron más cautos fueron los sindicatos, que en un primer momento adoptaron una postura más bien distante hacia la movilización, para luego aproximarse lentamente a los estudiantes a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que convocó dos huelgas generales en las que los dirigentes estudiantiles y sindicales marcharon codo a codo.

Además, en lo que para un país católico como Chile fue todo un suceso, hubo marchas en las que se congregaron 40.000 gays, lesbianas, heterosexuales, familias con sus hijos y abuelas con carteles pintados a mano con la leyenda «Mi nieto es gay y yo lo respaldo», en reclamo de la legalización de las uniones homosexuales.

Las mujeres también lograron reunir a miles de personas para exigir la igualdad de derechos de género y de participación política. Si bien las cifras evidenciaron una leve mejora durante la presidencia de Bachelet, la presencia de mujeres en funciones políticas es escandalosamente baja: de 38 senadores, solo cinco son mujeres, y entre los 120 diputados hay solo 18 mujeres; en el ámbito regional no hay más

de 43 alcaldesas sobre 345 alcaldías; 493 de 2.140 concejalías y solo cuatro de las 22 carteras ministeriales están encabezadas por mujeres.

En las luchas regionales como la de Magallanes, la provincia más austral del país, los encolerizados pobladores de la Patagonia paralizaron las actividades para llamar la atención sobre los problemas que generaban los costos energéticos y el descuido y las desventajas estructurales básicas a las que están sometidas las provincias. Las protestas de la comunidad mapuche, sus huelgas de hambre y sus movilizaciones, de un fuerte impacto en la opinión pública, tienen lugar desde 2010 en reclamo por el histórico sometimiento de su pueblo y la falta de derechos.

Miles y miles se alzan en todo el país contra la construcción de embalses en la Patagonia, rechazados por 70% de la población. Ahora se verá si los poderosos intereses que tienen la mira puesta en las multimillonarias inversiones serán más fuertes que la amplia red «Patagonia sin represas», que ya cuenta con nexos internacionales y agrupa a casi 80 ONG, organizaciones ecologistas y movimientos civiles.

En resumen: la cultura política del país, que siempre optó por generar equilibrios y evitar conflictos sobre la base de una estructura autoritaria, se ve radicalmente cuestionada por las protestas masivas, entre las que destacan

en particular las movilizaciones estudiantiles. Cualquier intento de los partidos políticos por ponerse a la cabeza de estos levantamientos es rechazado de cuajo, por ser considerado una clara instrumentalización de los reclamos («el pueblo unido avanza sin partido», dicen los movilizadores). Más allá de las demandas concretas –en materia de educación,

derechos indígenas, medio ambiente, género–, el carácter masivo de las protestas manifiesta el abismo que separa a la sociedad civil de la política, así como la pérdida de credibilidad, de unión y de liderazgo que han experimentado los partidos, algo característico de las sociedades posdemocráticas. De pronto, Chile ha comenzado a moverse. ☐

TEMAS

CULTURA, IDEOLOGÍA, SOCIEDAD

Octubre-Diciembre de 2011

La Habana

Nº 68

COMUNICACIÓN Y ESFERA PÚBLICA

ENFOQUE. Elogio de la razón y de la locura: los caminos encontrados de la opinión pública, **Raúl Garcés**. Prensa e imaginarios del riesgo, **Alain Basail Rodríguez**. Diálogos radiales: influencias culturales norteamericanas en la música alternativa cubana, **Susan Thomas**. La otra revolución, **Kathryn Currier Moody**. La imagen país y la diplomacia pública: una mirada desde la comunicación institucional, **Alina Altamirano Vichot**. Escuchando el cambio: reguetón y realidad cubana, **Nora Gámez Torres**. Beatriz Maggi y la palabra como compinche, **Denia García Ronda**. ¿Equilibrio en la frontera? México en la prensa norteamericana, **Michael Shifter y Rachel Schwartz**. CONTROVERSIA: El Mariel treinta años después, **Antonio Aja, Jesús Arboleya, Andrés Gómez, Magali Martín Quijano, Rafael Hernández**. ENTRETENEMAS: Cuba, su economía y la Unión Soviética, **José Luis Rodríguez**. Límites del cambio: de la desigualdad de razas a la diferencia de culturas, **Wilder Pérez Varona y Reynier Abreu Morales**. Desigualdades de género en la ciencia minera cubana, **Yuliuva Hernández García**. Nuevo debate sobre los problemas institucionales de la historiografía cubana, **Jorge Ibarra**. Protestantismo cubano desde lo ecuménico histórico, años 90, **Amós López Rubio**. LECTURA SUCESIVA: Memorias en cuerpos fragmentarios, **Cira Romero**. Literatura, historia y la república perdida, **Román de la Campa**. Raúl: revolucionario durante toda su vida, **Gustavo Placer Cervera**.

Próximo número: *Ciencia y sociedad*.

Temas es una publicación trimestral cubana, dedicada al análisis de los problemas de la cultura artística y literaria, de las ciencias sociales y las humanidades, la teoría política y la sociedad contemporáneas. Colaboraciones y suscripciones: Calle 23, No. 1155, entre 10 y 12, El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 838 3010. Correo electrónico: <temas@icaic.cu>. Página web: <www.temas.cult.cu>.